

EL PROFESORADO DEL I.E.S. ARICEL DE ALBOLOTE (GRANADA)

realiza el siguiente

MANIFIESTO

Como profesores de la Enseñanza Pública Andaluza deseamos manifestar nuestra protesta y nuestro más absoluto rechazo a las medidas, obvias pero claramente insuficientes y negligentes, adoptadas por las autoridades políticas y educativas para resolver el problema del contagio del COVID-19 en las aulas.

Para empezar, queremos decir que no se conoce ningún colectivo profesional tan abandonado a su suerte como el de quienes nos dedicamos a la enseñanza, algo que se hace evidente con la paradoja de que en la calle solo se puedan reunir hasta seis personas y en las aulas nos impongan ratios de hasta treinta y tres alumnos en 1º y 2º de E.S.O.

Han pasado casi ocho meses sin que los responsables políticos y educativos hayan aportado, a sabiendas, ni el espacio, ni el material, ni el personal necesario para que se pueda desarrollar nuestra actividad con un reducido riesgo y con ciertas garantías de éxito. Ese tiempo ha servido para que las autoridades hagan dejadez de sus funciones, apelando a la ya manida autonomía de los centros y delegando decisiones y responsabilidades en los equipos directivos y seguidamente en el profesorado. La panacea para evitar el contagio son geles y mascarillas a granel, según publican, aunque tampoco es así porque el material enviado es insuficiente y supondrá que seamos nosotros los que tengamos que adquirir las mascarillas particularmente. Han mentido recurrentemente y con alevosía sobre las condiciones en las que trabajamos, sobre la ratio de alumnos por clase, sobre los espacios que hay en los centros educativos, sobre el material con el que trabajamos y sobre el alto nivel de seguridad que nos ofrecen las medidas adoptadas. Lo que no sirve y es muy peligroso en el resto de lugares resulta ser muy eficaz en las clases. Riesgos que se multiplican exponencialmente debido a la ausencia regular de un 10% de profesorado que, por diversas circunstancias (incluidas la de haber dado positivo en prueba PCR o haber sido contacto estrecho de alguno), tiene que ser cubierto insuficientemente por el profesorado de guardia, por los miembros del equipo directivo y hasta por otro profesorado en sus horas de no docencia directa con el alumnado, con el coste en términos de regularidad del proceso de enseñanza y aprendizaje que ello conlleva, amén del debilitamiento de la convivencia a que también conduce la ausencia de un número tan importante de docentes. Además tenemos que realizar la sustitución inmediata del profesorado que tiene que guardar cuarentena en casa por haberse contagiado de COVID-19.

La Junta de Andalucía enarbola la bandera de la modernidad y pregona a los cuatro vientos, desde mucho antes de la pandemia, las bondades y la necesidad de utilizar las tecnologías de la comunicación, exigiendo al profesorado la utilización de las mismas. Sin embargo, no se ha preocupado de renovar ni de incrementar los equipos informáticos de los centros. Tampoco hay ninguna voluntad de que los centros se vayan renovando y tecnificando, algo que queda demostrado al no permitir que se invierta en material inventariable más del 10% del presupuesto global. El fracaso y claudicación de la Junta de Andalucía en el aspecto tecnológico se ve claramente en la recomendación de que se utilice en exclusiva una

plataforma privada, Google Classroom, como vía de comunicación telemática con el alumnado. Teniendo una plataforma de propiedad pública magnífica, Moodle Centros, más adecuada para la enseñanza que la anterior, han tenido que desestimarla porque no han invertido lo suficiente ni en servidores adecuados con la capacidad suficiente, ni en personal cualificado y necesario que la mantenga. Por otro lado, nos gustaría recordar que la enseñanza telemática es posible gracias al esfuerzo económico del profesorado que, aparte de formarse en sus horas libres y atender a familias y alumnado a horas intempestivas, paga de su bolsillo la conexión a internet con la que realiza buena parte de sus funciones docentes fuera del centro educativo; y, pese a que en las últimas semanas se han enviado terminales a los centros que se han distribuido entre el profesorado como apoyo a la docencia, nos hemos encontrado con la inesperada sorpresa de que, al no poder modificar los permisos de administrador, es imposible instalar las aplicaciones que el profesorado necesita en función de la materia que imparte o de las actividades que propone a su alumnado.

Nos han abandonado, y no creemos que les importe lo que nos pase. Nos da la sensación de que lo único que esperan es que acabe el curso cuanto antes, lo que supondrá menos problemas y un gran ahorro, salvo que habrá que resolver la cuestión del cuidado de los niños (nuestra verdadera función oculta y la auténtica preocupación de muchos padres y madres y de la administración por las posibles protestas de éstos). Nuestra salud importa poco pese a que los centros educativos suponen una mayor exposición al virus que las residencias de mayores, siendo equiparables a ellas en el contacto directo y masivo en espacios tan pequeños. Desde hace meses nos han recordado los profesionales muertos por esta enfermedad: sanitarios, policías y militares... pero de otros colectivos (empleados de residencias, dependientes de comercios, camioneros...), entre los que nos encontramos los docentes, no hay estadísticas ni las habrá. Esta es la consideración que merecemos el resto de los trabajadores. Esperemos que no formemos parte de ellas por adquirir demasiado protagonismo.

A nadie le resulta agradable utilizar la baza de los enfermos que han sufrido secuelas y mucho menos de los que han fallecido. Tampoco a nosotros, pero nos están echando a las patas de los caballos. El nuestro es un colectivo constantemente expuesto al contacto diario con numerosos alumnos en un entorno cerrado, especialmente en la educación secundaria, donde hay un mayor número de alumnos/as por profesor/a, a lo que se añade una media de edad elevada y un importante desgaste psicológico. Esto conlleva un elevado riesgo de contagio y de vulnerabilidad y, sin embargo, hasta los que según las directrices de Sanidad son personal de riesgo han sido ninguneados y se les ha informado de que no tienen ningún problema para incorporarse normalmente.

Las autoridades, entre amenazas veladas y abandono, nos piden resignación y obediencia ciega y aprovechan para aumentar las horas de trabajo, que ya sobrepasan ampliamente nuestra jornada laboral, con reuniones y tareas burocráticas claramente inútiles y abusivas. También, algunos de ellos, junto con parte de la sociedad, nos señalan con el dedo desde su ignorancia y/o su mala fe y difunden la idea que no queremos trabajar y solo buscamos prolongar nuestras enormes vacaciones. Ladran, luego cabalgamos. Creemos que ha llegado el momento de decir bien alto lo que pensamos.

Albolote, noviembre de 2020